(Unofficial Translation)

9 de mayo de 2025

Para:

Federal Bureau of Investigation (FBI)
División de Investigaciones Criminales
División de Derechos Civiles
Oficina de Operaciones Internacionales

De parte de:

Willie J. Huntley, Jr.
Abogado
The Huntley Firm, P.C.
Ex Fiscal Federal Auxiliar (AUSA)
Distrito Sur de Alabama

Asunto: Conspiración criminal por parte de Rixi Ramona Moncada Godoy, Sonia Marlina Dubón Villeda, Rebeca Patricia Santos Rivera, Manuel Antonio Díaz Galeas y otros funcionarios no identificados del Gobierno de Honduras para obstruir la ejecución de una sentencia firme y vinculante a favor de un ciudadano estadounidense.

ANTECEDENTES:

DRC Inc. (DRC), una empresa de ingeniería y construcción con sede en los Estados Unidos, celebró un contrato legal con el Gobierno de Honduras en el año 2000 para diseñar y construir infraestructura de agua potable y alcantarillado en varios municipios hondureños, beneficiando a más de 300,000 de los hondureños más pobres afectados por el huracán Mitch. En Honduras, DRC trabajó en conjunto con la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE), USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), SOPTRAVI, ENEE, el Banco Mundial, SANAA, gobiernos municipales y FHIS/SEDECOAS.

El contrato fue firmado en una transmisión televisada en vivo y ejecutado personalmente por el presidente Carlos Flores en su despacho presidencial. Dicho contrato fue financiado bajo un acuerdo bilateral entre la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos, administrado por USAID y FHIS respectivamente. DRC Inc. completó todos los proyectos a satisfacción de todas las partes en 2003, incluyendo decenas de millones de dólares en inversiones de infraestructura, ingeniería y cumplimiento ambiental. El proyecto tuvo tanto éxito que la Embajada de los Estados Unidos celebró

una ceremonia privada en la que otorgó a DRC y a Murray Paul Farmer el reconocimiento “You Make a Difference Award”.

Tras la negativa de Honduras y de USAID de pagar por las obras terminadas, DRC Inc. inició un proceso de arbitraje internacional, que culminó en 2009 con un laudo final a su favor. En 2019, una empresa hondureña—Nacional de Ingenieros S.A. de C.V. (NAINSA)—presentó una acción de cobro basada en la cesión de derechos realizada por DRC Inc. Lejos de impugnar la validez del laudo, el Gobierno de Honduras optó por llegar a un acuerdo con NAINSA. El 27 de febrero de 2020, SEDECOAS y FHIS firmaron un “Convenio de Transacción Extrajudicial” formal y protocolizado, en el que el Estado reconoció expresamente la naturaleza vinculante del laudo arbitral, reconoció que se originaba de DRC Inc., y acordó pagar L.160,000,000.00 (aproximadamente 6.5 millones de dólares). Finalmente, Honduras pagó a NAINSA aproximadamente 18 millones de dólares.

Este pago fue aprobado mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 17-2020. Nacional de Ingenieros fue pagado en su totalidad por el Gobierno de Honduras: el laudo arbitral, los intereses y los honorarios legales fueron liquidados en su totalidad a NAINSA. Dicho acuerdo de pago fue presentado conjuntamente ante los tribunales hondureños por la Procuraduría General de la República (PGR) y NAINSA, convirtiéndose en una sentencia firme y vinculante en Honduras que también reconoció la deuda pendiente con DRC Inc.

I. INTRODUCCIÓN

La presente denuncia penal formal se presenta en nombre del Sr. Murray Paul Farmer, ciudadano de los Estados Unidos y representante principal de DRC, Inc., una empresa constituida en los EE. UU. que obtuvo una sentencia firme y vinculante por 106 millones de dólares contra la República de Honduras el 9 de septiembre de 2022, como resultado del incumplimiento de pago por parte del Estado hondureño respecto a los proyectos realizados. La Procuraduría General de la República, encabezada por Manuel Antonio Díaz Galeas, tenía por ley un plazo de 10 días para apelar dicha sentencia, y no lo hizo. Esta sentencia fue confirmada por los tribunales hondureños y sigue sin cumplirse debido a órdenes ilícitas expresas del Gobierno de Honduras, emitidas en transmisiones televisadas en vivo y mediante múltiples comunicaciones escritas.

Como consecuencia de las acciones legales legítimas emprendidas para hacer cumplir el fallo, el Sr. Farmer ha sido objeto de una campaña de represalias coordinadas por parte de altos funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos:

- Rixi Ramona Moncada Godoy, ex Ministra de Finanzas,
- Sonia Marlina Dubón Villeda, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia,
- Rebeca Patricia Santos Rivera, Presidenta del Banco Central de Honduras, y
- Manuel Antonio Díaz Galeas, Procurador General de la República (PGR).

Según el derecho hondureño, únicamente el Presidente de la República en funciones y los diplomáticos extranjeros acreditados gozan de inmunidad sustantiva frente a procesos de

extradición. Todos los demás funcionarios públicos, incluidos los ministros de gabinete, magistrados, autoridades bancarias y el Procurador General, están plenamente sujetos a procesos judiciales de extradición en virtud del Tratado de Extradición entre EE. UU. y Honduras de 1909, el cual sigue vigente y ha sido aplicado en años recientes para extraditar incluso a expresidentes y jefes policiales.

En consecuencia, Rixi Ramona Moncada Godoy (ex Ministra de Finanzas), Sonia Marlina Dubón Villeda (Magistrada de la Corte Suprema), Rebeca Patricia Santos Rivera (Presidenta del Banco Central) y Manuel Antonio Díaz Galeas (Procurador General) no gozan de inmunidad alguna ante una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Ninguna de las conductas que se les atribuyen—corrupción, obstrucción de justicia, prevaricato judicial o incitación a la violencia—califica para inmunidad. Por lo tanto, los cuatro son legalmente extraditables a los Estados Unidos.

Un precedente claro para la extradición de Rixi Ramona Moncada Godoy por corrupción, obstrucción y fraude financiero es el caso de Manuel Chang, ex Ministro de Finanzas de Mozambique. En 2018, Chang fue arrestado en Sudáfrica a petición del Departamento de Justicia de los EE. UU., que lo acusó de fraude electrónico (*wire fraud*), fraude de valores y lavado de dinero relacionado con un escándalo de préstamos. Engañó a inversionistas estadounidenses y violó regulaciones internacionales de financiamiento.

La conspiración criminal del Gobierno de Honduras incluye obstrucción de la justicia, fraude judicial, amenazas, difamación y la puesta en peligro de la vida de un ciudadano estadounidense en el extranjero, lo cual es aún más grave que lo cometido por Chang, quien no incitó a la violencia contra estadounidenses como lo hizo Rixi Ramona Moncada al declarar que era un “deber patriótico” no pagar.

El Sr. Farmer es víctima, ciudadano estadounidense y propietario de una corporación estadounidense, lo que hace que los funcionarios hondureños mencionados estén sujetos al derecho penal de los Estados Unidos por sus acciones. Han violado múltiples leyes penales federales, incluyendo estatutos que prohíben la extorsión, coerción y represalias contra ciudadanos estadounidenses conforme a:

- 18 U.S.C. § 1203 (toma de rehenes),
- 18 U.S.C. § 351 (violencia contra funcionarios protegidos), y
- 18 U.S.C. § 2331 y siguientes (intimidación internacional contra nacionales estadounidenses).

Las acciones descritas en esta denuncia caen dentro de la jurisdicción del Gobierno de los Estados Unidos, ya que constituyen violaciones al derecho penal federal cometidas contra un ciudadano y una empresa estadounidense.

II. DECLARACIÓN PÚBLICA DE REPRESALIA CRIMINAL POR PARTE DE RIXI RAMONA MONCADA GODOY Y MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS

El 3 de febrero de 2023, la entonces Ministra de Finanzas Rixi Ramona Moncada Godoy y el Procurador General Manuel Antonio Díaz Galeas, desde el podio de la Casa Presidencial, transmitieron en vivo por cadena nacional una conferencia de prensa en la que declararon (disponible en el canal de YouTube @murrayfarmer849):

“La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Finanzas hemos asumido la decisión de no entregar ni un tan solo lempira...”

y además afirmaron:

“Honduras no va a pagar una deuda que es fraudulenta y corrupta... Es un deber patriótico no pagar.”

Rixi Ramona Moncada Godoy y Manuel Antonio Díaz Galeas nombraron personalmente al Sr. Murray Paul Farmer, acusándolo de corrupción y fraude sin presentar prueba alguna, a pesar de existir una sentencia firme en su favor por la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado que beneficiaron a más de 300,000 hondureños y que no fueron pagados. Esta declaración difamatoria y de represalia provocó de inmediato una ola de amenazas en línea contra la vida e integridad del Sr. Farmer.

Tras la emisión de estas declaraciones por televisión nacional, el Sr. Farmer fue objeto de amenazas violentas y llamados al daño físico a través de redes sociales hondureñas. Estas amenazas no fueron incidentes aislados; aparecieron en secciones de comentarios públicos de medios nacionales como HCH Televisión Digital, Canal 6 Honduras y el Periódico El Libertador, atacando al Sr. Farmer por su nombre e imagen. Entre las amenazas se incluyen afirmaciones explícitas como:

- “Lo vamos a linchar si lo vemos aquí”
- “Ese gringo no sale vivo de Honduras”
- “Ese tipo merece plomo”
- “Maten al gringo ladrón”
- “Ese ladrón tiene que pagar, pero con sangre”

Otras amenazas incitaban a su expulsión violenta:

- “A ese corrupto hay que sacarlo a patadas”
- “Si lo veo en la calle, yo mismo le doy su merecido”

Estas amenazas, hechas en respuesta directa al discurso y su difusión mediática, generaron un riesgo creíble para la seguridad física del Sr. Farmer y constituyen incitación coordinada a la violencia contra un ciudadano estadounidense en el extranjero. Actualmente, el Sr. Farmer solo puede transitar por Honduras con protección armada, y se solicita formalmente que el FBI trate estas amenazas como actos de

intimidación internacional bajo el 18 U.S.C. § 2331 et seq. y coacción retaliatoria bajo el 18 U.S.C. § 351.

La esposa e hijos del Sr. Farmer son hondureños y no pueden viajar con seguridad a Honduras debido a las declaraciones de Rixi Ramona Moncada Godoy y Manuel Antonio Díaz Galeas. Cuando el Sr. Farmer viaja a América Latina, debe hacerlo acompañado de escoltas armados por razones de seguridad.

Las declaraciones de Moncada y Díaz Galeas no solo constituyeron una desobediencia abierta a las resoluciones judiciales, sino también una incitación directa al odio y la violencia contra todos los ciudadanos estadounidenses que tienen inversiones en Honduras.

Ese mismo día, en una respuesta inusualmente contundente, la Corte Suprema de Justicia de Honduras emitió un comunicado oficial rechazando públicamente la narrativa promovida por Rixi Moncada y Díaz Galeas, quienes falsamente acusaron al Poder Judicial de corrupción tras la ejecución legal de la sentencia a favor del Sr. Farmer. En su comunicado del 3 de febrero de 2023, la Corte declaró:

"1. La demanda en mención en dicho comunicado, que da lugar a una ejecución forzosa por el orden de 2,600 millones de Lempiras contra el Estado de Honduras, ha seguido de manera adecuada la tramitación del expediente en cada una de las instancias jurisdiccionales. La denuncia pública como mecanismo de defensa que pretende utilizar el Gobierno tratando de justificar los yerros cometidos por la PGR en dicha tramitación, no es compartida en absoluto por este Poder del Estado.

2. Uno de estos graves yerros de la PGR, es no haber presentado en el momento debido el Recurso de Apelación ante el Juzgado de Letras correspondiente, diligencia que han pretendido corregir por la vía de la presentación de una Acción de Amparo en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, sin haber agotado la enunciada diligencia en el Juzgado de Letras.

3. Según establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46, de nueve numerales que señalan las causas de inadmisibilidad de la acción de Amparo, la Corte de Apelaciones respectiva, de forma unánime, estableció que PGR incurrió en los criterios de inadmisibilidad numero 1: "Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad" y con el establecido en el numeral 3: "Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes". (PGR no apeló la resolución, lo que es un requisito legal para interponer posteriormente el Amparo).

Esta declaración oficial de la Corte Suprema desacredita por completo las acusaciones televisadas de Moncada y Díaz Galeas, desmonta la mentira que dio origen a la represalia

gubernamental, y demuestra que el sistema judicial hondureño confirmó el fallo hasta que fue saboteado mediante obstrucción coordinada por parte del Ejecutivo.

Ese mismo día, el Sr. Farmer se encontraba físicamente presente dentro del Banco Central de Honduras, acompañado por su abogado y un ejecutor judicial, con la finalidad de ejecutar la sentencia. Portaban una orden judicial válida que requería la emisión inmediata del cheque. El cheque ya había sido impreso y se encontraba a la vista del Sr. Farmer—a pocos segundos de ser entregado.

En ese momento, el Sr. Farmer vio a sus abogados golpeando con urgencia el vidrio exterior del edificio del banco, señalándole que saliera. Debido a la política interna del banco que prohíbe el uso de celulares, desconocía lo que ocurría afuera. Al salir, le mostraron en un teléfono móvil la transmisión en vivo de la conferencia de prensa en la que Rixi Ramona Moncada Godoy declaraba públicamente que el Gobierno había decidido no pagar ni un solo lempira.

Al regresar al interior del banco, el personal le informó que el cheque no sería emitido y que el banco cerraba sus operaciones, a pesar de la orden judicial vigente y de la presencia de los funcionarios de ejecución.

Esta secuencia de hechos no solo constituye una obstrucción de justicia, sino también un acto flagrante de sabotaje extrajudicial. Demuestra que el pago estaba en proceso, autorizado judicialmente, y que la única razón por la que fue detenido fue la interferencia política ilegal.

III. 7 DE FEBRERO DE 2023 – DECLARACIÓN DE REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA, PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuatro días después, el 7 de febrero de 2023, Rebeca Patricia Santos Rivera, Presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), apareció en televisión nacional hondureña para afirmar falsamente que el cumplimiento del embargo judicial relacionado con la sentencia firme podría poner en riesgo la capacidad del gobierno para pagar salarios y financiar servicios públicos:

“Este tipo de embargos pone en riesgo el pago de salarios y servicios esenciales...”

Esta afirmación fue parte de una mentira coordinada, dentro de una campaña de desinformación más amplia orquestada por Rixi Moncada y Antonio Manuel Díaz Galeas. Dichas declaraciones pusieron en peligro la seguridad de la esposa, los hijos y la empresa del Sr. Farmer.

Estas manifestaciones constituyen actos de coerción y extorsión internacional, y entran dentro del ámbito de conducta penalizable conforme a la legislación de los Estados Unidos.

IV. 20 DE FEBRERO DE 2023 – CARTA Nº JUR-0370/2023 DE REBECA PATRICIA SANTOS RIVERA A LA MAGISTRADA SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA

El 20 de febrero de 2023, el Banco Central de Honduras (BCH), bajo la presidencia de Rebeca Patricia Santos Rivera, emitió una carta oficial (Ref. JUR-0370/2023) en la que confirmó su negativa deliberada a cumplir con la orden judicial que ordenaba liberar los fondos embargados a favor de DRC Inc.. A pesar de reconocer que el monto embargado seguía depositado en la cuenta gubernamental correspondiente, el BCH declaró:

“Se reitera que el monto en cuestión continúa depositado en la cuenta correspondiente, pero no será transferido mientras persistan los cuestionamientos legales presentados por la PGR.”

La carta también reveló que Manuel Antonio Díaz Galeas, Procurador General de la República (PGR), presionó directamente al Banco Central para que no cumpliera con la orden judicial de pago a DRC, advirtiendo sobre “posibles responsabilidades penales y administrativas” en caso de que se procediera con la transferencia.

El BCH admitió estar reteniendo el pago “dada la existencia de múltiples recursos judiciales en curso que cuestionan la legalidad de dicha medida”—una afirmación que contradice directamente el fallo judicial que ratificó la obligación de pago.

Esta carta constituye una prueba clara de colusión institucional y obstrucción, demostrando que el Banco Central, bajo presión política de la PGR (Manuel Antonio Díaz Galeas) y de Rixi Ramona Moncada Godoy, violó intencionalmente una orden judicial válida para evitar el pago a un ciudadano estadounidense.

V. CARTAS EX PARTE DE LA PGR AL BANCO CENTRAL

Las siguientes comunicaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la dirección de Manuel Antonio Díaz Galeas, dirigidas a Rebeca Patricia Santos Rivera, al Banco Central, a la Corte Suprema de Justicia y a otros miembros del poder judicial, constituyen prueba clara de interferencia ex parte ilegal, obstrucción de la justicia y colusión para desobedecer una orden judicial válida:

1. 14 de octubre de 2022 – Oficio No. 229-D-GPR-2022: La PGR emitió una directriz secreta al Banco Central instruyéndole no cumplir con el embargo judicial, invocando falsamente la doctrina de la inembargabilidad de los fondos públicos, un argumento que ya había sido rechazado por los tribunales hondureños.
2. 25 de enero de 2023 – Oficio No. 013-D-GPR-2023: La PGR intensificó su interferencia mediante una carta adicional que amenazaba con responsabilidad penal y administrativa en caso de cumplimiento de la orden judicial, coaccionando de forma efectiva a los funcionarios del BCH para que incumplieran la ley.

3. 30 de enero de 2023 – Oficio No. 017-D-GPR-2023: Esta última comunicación ex parte profundizó aún más la obstrucción, al referirse a recursos legales irrelevantes y afirmar falsamente que la resolución judicial aún estaba pendiente.

Las tres cartas fueron emitidas sin conocimiento ni notificación al abogado del Sr. Farmer y sin autorización judicial, en violación directa de las garantías del debido proceso, la transparencia y la equidad procesal, tanto bajo el derecho hondureño como el derecho internacional.

Estas comunicaciones secretas fueron diseñadas para socavar una sentencia judicial válida e intimidar al Banco Central, con el fin de retener ilegalmente fondos adeudados a un ciudadano estadounidense. Esta conducta constituye una obstrucción criminal de la justicia y forma parte de una conspiración estatal coordinada para privar al Sr. Farmer de su propiedad y de su derecho legal a obtener reparación, bajo el amparo del poder público.

VI. 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 – REUNIÓN SECRETA ENTRE MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS (PGR) Y LA PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA

El 28 de noviembre de 2023, tuvo lugar una reunión entre Manuel Antonio Díaz Galeas, Procurador General de la República (PGR), y Rebeca Raquel Obando, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. No se notificó a ninguna parte contraria ni se emitió aviso público alguno sobre dicho encuentro.

Esta reunión ex parte constituye una prueba directa de colusión al más alto nivel del poder judicial hondureño.

VII. OBSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA SONIA MARLINA DUBÓN MEDIANTE LA REAPERTURA DE AMPAROS YA RESUELTOS

A inicios de 2023, se instaló una nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras tras las elecciones legislativas del 25 de enero de 2023, con una transferencia formal de poder el 16 de febrero de 2023. Por primera vez en la historia del país, la Corte tenía una mayoría del partido LIBRE, otorgando a la administración socialista de la presidenta Xiomara Castro un control sin precedentes sobre el poder judicial. Entre los nuevos magistrados se encontraba Sonia Marlina Dubón Villeda, esposa de Enrique Flores Lanza, exfuncionario del gobierno de Zelaya sancionado por EE. UU. y actual asesor legal de la presidenta Castro.

Una vez en funciones, la nueva Corte—bajo la influencia directa de Dubón—reabrió y admitió un amparo constitucional que había sido previamente rechazado por extemporáneo e inadmisibles por la Corte de Apelaciones el 5 de diciembre de 2022. El recurso, presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la dirección de Manuel Antonio Díaz Galeas, incumplía todos los plazos procesales y tenía como único objetivo anular la sentencia firme y vinculante a favor de DRC Inc.

21 de febrero de 2023 – Abuso de poder judicial para facilitar la obstrucción:

El 21 de febrero de 2023, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, bajo la autoridad de la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, abrió formalmente el expediente constitucional SCO-0107-2023 en respuesta al Oficio JUR-0370/2023, una carta presentada por Rebeca Patricia Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH).

En lugar de confirmar la firmeza y ejecutabilidad de la sentencia a favor de DRC Inc., la Corte trató esta correspondencia interna del gobierno como base para iniciar un nuevo procedimiento constitucional, congelando de facto la ejecución. DRC Inc. no fue parte en este nuevo caso y no se le permitió presentar escritos ni participar, mientras que la magistrada Dubón permitió comunicaciones ex parte de funcionarios gubernamentales y otorgó legitimación procesal a terceros como el BCH y la PGR.

Este doble estándar flagrante evidencia la alineación de la Corte con el poder ejecutivo y su utilización del proceso constitucional no para proteger derechos, sino para obstruir a un acreedor estadounidense con sentencia firme.

El 27 de marzo de 2023, Sonia Marlina Dubón Villeda redactó personalmente una resolución admitiendo unilateralmente este amparo procesalmente muerto, en violación directa del derecho hondureño. Sus acciones constituyen prevaricato judicial y confirman aún más la colusión entre la PGR y la Corte Suprema recientemente politizada. Según la jurisprudencia establecida, un amparo declarado inadmisibile no puede ser vuelto a presentar (“*amparo encima de otro amparo*”), pero Dubón fabricó un vacío procesal para obstruir la justicia y proteger al Poder Ejecutivo hondureño de su responsabilidad financiera con un ciudadano estadounidense.

El 27 de febrero, Sonia Marlina Dubón Villeda introdujo ante la Sala de lo Constitucional los siguientes expedientes:

- Amparos de DRC Inc. núms. 30-2023 y 56-2023,
- La solicitud de Ad Effectum Videndi (Exp. 59-2023), y
- La carta del BCH (Oficio 017-D-PGR-2023) relacionada con el expediente SCO-0107-2023, que ella misma abrió.

El 3 de marzo de 2025, la Sala de lo Constitucional deliberó sobre ambos amparos pendientes y sobre la solicitud de Ad Effectum Videndi interpuesta por la PGR en relación con la ejecución del laudo arbitral a favor de DRC Inc. Según las actas oficiales de la sesión, ambos amparos fueron resueltos de forma unánime a favor de DRC Inc. por todos los magistrados presentes. Sin embargo, Sonia Marlina Dubón Villeda no ha emitido las sentencias respectivas, reteniéndolas ilegalmente en su despacho.

A pesar de este resultado claro y favorable, la magistrada Dubón ha retenido ilegalmente la publicación de estas decisiones, sin darles trámite ni ejecución procesal. Como

resultado, estas resoluciones—aunque firmes y ejecutables—permanecen en un limbo jurídico.

Si estas resoluciones se publicaran formalmente e ingresaran al registro judicial, el Banco Central de Honduras estaría legalmente obligado a liberar los fondos embargados, y DRC Inc. sería pagado de inmediato. La supuesta supresión de estas sentencias favorables constituye obstrucción judicial, abuso de cargo público y sabotaje deliberado de un fallo firme en beneficio de un ciudadano estadounidense.

VIII. OBSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA SONIA MARLINA DUBÓN MEDIANTE LA REACTIVACIÓN DEL AD EFFECTUM VIDENDI YA DEROGADO

No satisfecha con la manipulación de los amparos, Sonia Marlina Dubón Villeda también resolvió una solicitud de Ad Effectum Videndi presentada por Manuel Antonio Díaz Galeas. La ley hondureña exige que este tipo de solicitudes se resuelvan en un plazo de 62 horas. Sin embargo, Dubón Villeda retrasó su fallo durante más de 730 días, en una clara y abierta violación a los plazos judiciales. Este retraso constituye un nuevo ejemplo de prevaricato judicial, cometido exclusivamente para paralizar la ejecución del laudo arbitral a favor de un ciudadano estadounidense.

Es importante destacar que Sonia Marlina Dubón Villeda nunca se recusó, a pesar de sus vínculos políticos y matrimoniales con el principal estratega legal del partido de gobierno—un conflicto de interés tan grave que invalida éticamente sus decisiones y las convierte en actos institucionalmente corruptos.

En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) aprobó formalmente la derogación del mecanismo Ad Effectum Videndi, reconociéndolo como una herramienta procesal obsoleta y frecuentemente abusada. La propia Corte advirtió que el Ad Effectum Videndi—codificado en el Artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) de 1906—había sido utilizado indebidamente por funcionarios judiciales para retrasar la justicia y manipular los resultados. La Corte incluso aprobó un proyecto de ley para solicitar su derogación legislativa.

A pesar de esta repudiación oficial desde hace más de una década, la jueza Sonia Marlina Dubón Villeda utilizó el Ad Effectum Videndi para apoderarse y retener ilegalmente el expediente de DRC Inc. (Exp. 59-2023) durante más de dos años, superando por mucho el límite legal de retención, en abierta desobediencia a las normas judiciales y con el único propósito de obstruir la ejecución de una sentencia firme a favor de un ciudadano estadounidense. Esta conducta constituye abuso de autoridad, prevaricato y obstrucción deliberada de la justicia.

A pesar de la derogación por parte de la propia Corte, Sonia Marlina Dubón Villeda usó la solicitud de Ad Effectum Videndi presentada por Manuel Antonio Díaz Galeas el 13 de enero de 2023, y emitió una resolución más de 776 días después, en violación directa del Artículo 61 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que

establece que dichos expedientes no pueden ser retenidos por más de 62 horas. Las propias normas de la Corte indican que los funcionarios que incumplen esta disposición enfrentan revocación del cargo, responsabilidad civil y enjuiciamiento penal.

Al emitir una resolución extemporánea sobre un procedimiento no vinculante y ya abolido, Dubón Villeda incurrió en un acto claro de prevaricato judicial, saboteando deliberadamente la ejecución de una sentencia firme mediante un mecanismo procesal ilegal y derogado.

Esta conducta resulta aún más grave a la luz de las declaraciones televisadas del 4 de abril de 2025 realizadas por Rebeca Lizette Raquel Obando, presidenta de la misma Corte Suprema en la que Dubón ejerce funciones. En dicha transmisión, Obando condenó abiertamente la cultura de corrupción judicial en Honduras, declarando:

“La corrupción no es solamente recibir dinero—también es guardar un expediente durante uno o dos años sin resolverlo... ¿Eso es justicia? No, no lo es.”

Obando lamentó que los jueces atrincherados se nieguen a recusarse y abusen del sistema para proteger sus intereses políticos. Reconoció que la Corte está “atada de manos” por leyes obsoletas que impiden suspender a jueces corruptos.

Sin embargo, a pesar de esta admisión pública, la misma Corte Suprema—bajo la presidencia de Obando—continúa tolerando y permitiendo los actos gravemente indebidos de Sonia Marlina Dubón Villeda. La retención de la sentencia firme a favor de DRC Inc., el uso de herramientas procesales abolidas y su negativa a recusarse—a pesar de su claro conflicto de interés político—encajan perfectamente con el patrón de corrupción que la propia presidenta de la Corte afirma combatir.

¿Qué piensa hacer Rebeca Obando al respecto?

Esta contradicción no solo evidencia un fracaso institucional, sino también un doble estándar deliberado: una Corte Suprema que utiliza la ley como arma contra sus enemigos mientras protege a sus aliados políticos. Tal como lo reconoció la propia presidenta de la Corte Suprema:

“Lo peor que puede hacer un juez no es recibir dinero, sino retrasar una sentencia firme.”

Y eso es exactamente lo que Sonia Marlina Dubón Villeda ha hecho durante casi tres años con DRC Inc.

IX. LA DESTRUCCIÓN DE LA FIRMEZA JUDICIAL: LA CAMPAÑA DE MONCADA, DUBÓN Y SANTOS CONTRA LOS PLAZOS PROCESALES

En el centro de esta conspiración criminal se encuentra un principio peligroso y desestabilizador: Rixi Ramona Moncada Godoy, Sonia Marlina Dubón Villeda, Manuel

Antonio Díaz Galeas y Rebeca Patricia Santos Riverabuscan dismantelar el propio concepto de los plazos legales. A través de una manipulación coordinada del sistema judicial hondureño, estos funcionarios han intentado reabrir casos cerrados, revivir recursos procesales muertos y suspender la ejecución de sentencias firmes—todo bajo el falso pretexto de que los plazos legales no aplican al Estado.

Esto no es simplemente un error jurídico—es un ataque deliberado al Estado de Derecho.

Los plazos procesales no son tecnicismos administrativos. Son una piedra angular universal de la justicia, observada en todos los sistemas judiciales funcionales del mundo. Sin plazos:

- Ninguna sentencia sería jamás firme.
- Ninguna parte estaría protegida.
- Ningún inversionista estaría seguro.
- Y ninguna nación podría afirmar que respeta el Estado de Derecho.

Si se permitiera que los demandantes—especialmente los gobiernos—litigaran sin respetar los plazos, cada caso podría reabrirse indefinidamente, cada ejecución paralizarse, y cada demandado ser perseguido sin fin. En Honduras, esto equivaldría a un colapso institucional, transformando al poder judicial en un instrumento de retraso permanente y retaliación política.

A nivel global, tal precedente invitaría al caos. Los contratos dejarían de tener fuerza legal. El arbitraje perdería todo sentido. Los tribunales se convertirían en herramientas de coerción en lugar de guardianes de justicia. La firmeza es lo que hace posible la justicia.

Las acciones de estos funcionarios no solo representan corrupción, sino una amenaza sistémica al concepto mismo de seguridad jurídica. Su conducta debe ser condenada y urgentemente contenida.

X. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA Y SU ESPOSO ENRIQUE FLORES LANZA HAN SIDO SANCIONADOS EN LA LISTA ENGEL

Tanto la magistrada de la Corte Suprema Sonia Marlina Dubón Villeda como su esposo, Enrique Flores Lanza, han sido formalmente designados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Lista Engel, por sus respectivos roles en el debilitamiento de las instituciones democráticas y por su participación en actos significativos de corrupción en Honduras.

Enrique Flores Lanza, ex Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya y actual asesor legal de la presidenta Xiomara Castro, fue sancionado por manipular el poder estatal con fines partidarios y por proteger de la justicia a sus aliados políticos.

Su esposa, Sonia Marlina Dubón Villeda, fue sancionada por utilizar su autoridad judicial para bloquear la ejecución de sentencias relacionadas con corrupción, y por emitir resoluciones motivadas políticamente con el fin de proteger a su esposo y a otros miembros del partido oficialista LIBRE.

Su inclusión en la Lista Engel destaca el profundo conflicto de interés y la colusión institucionalizada que existe en los niveles más altos del poder judicial y del poder ejecutivo hondureño—una red que continúa obstruyendo la ejecución legal de una sentencia firme a favor de un ciudadano estadounidense, a través de fallos emitidos con el fin de proteger a miembros del partido LIBRE.

A pesar de estas sanciones internacionales, Sonia Marlina Dubón Villeda continúa ejerciendo funciones en la Corte Suprema de Justicia, y sigue emitiendo resoluciones judiciales políticamente motivadas para bloquear la ejecución del laudo arbitral a favor de un ciudadano de los Estados Unidos.

XI. ENJUICIAMIENTO RETALIATORIO DE LOS JUECES RAYMUNDO ESAÚ GRADIZ VILORIO E ISABEL MIRANDA HERNÁNDEZ

Como un nuevo acto de represalia institucional diseñado para obstruir la justicia y evitar la ejecución del laudo arbitral a favor de DRC, Inc., la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó el procesamiento penal de dos jueces hondureños: Raymundo Esaú Gradiz Vilorio e Isabel Miranda Hernández, ambos de los cuales dictaron resoluciones judiciales a favor de Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA) y DRC, Inc.

El juez Gradiz dictó una resolución válida a favor de DRC, Inc., en cumplimiento de una sentencia firme y ejecutable y del Decreto Ejecutivo No. 11-02020. El 18 de enero de 2024, la Corte de Apelaciones Civil de lo Contencioso Administrativo rechazó una denuncia por prevaricato en su contra, declarando que era “No Ha Lugar”. Es fundamental destacar que la Procuraduría General de la República (PGR) no apeló esa resolución.

La jueza Isabel Miranda Hernández enfrentó una situación casi idéntica—también falló conforme a la ley, y posteriormente fue objeto del mismo patrón de represalia política por el caso de NAINSA. La jueza Miranda simplemente confirmó el acuerdo entre la PGR y NAINSA y lo homologó como sentencia judicial. Resulta increíble que se le procese penalmente por haber validado y homologado un acuerdo mutuo entre las partes.

A pesar de la ausencia de apelaciones fiscales en ambos casos, la Corte Suprema reabrió posteriormente los expedientes y admitió recursos que ni siquiera fueron presentados por la PGR. La Sala de lo Penal declaró ambos casos procedentes y autorizó el procesamiento penal de los jueces, en decisiones tomadas de manera unánime. Estas actuaciones carecen de fundamento jurídico y confirman una interferencia política indebida en el poder judicial.

Este comportamiento retaliatorio de la Corte Suprema debe entenderse en el contexto más amplio de colusión institucional. El 18 de febrero de 2022, el Procurador General Manuel Antonio Díaz Galeas se reunió con Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), para coordinar acciones destinadas a proteger “los intereses del Estado”. Durante esta reunión, las partes acordaron explícitamente una “política preventiva para evitar demandas contra el Estado” y se comprometieron a mantener dicha coordinación en adelante.

Esta reunión constituye una prueba clara de un pacto fiscal deliberado para socavar la rendición de cuentas legal y obstruir la independencia judicial en casos contrarios a los intereses del Estado.

La persecución contra los jueces Gradiz y Miranda fue impulsada por UFERCO y por el exdirector de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro—ambos, según se informa, actuando bajo las órdenes directas del partido LIBRE. Estos actores forman parte de un aparato político utilizado para presionar y castigar a funcionarios judiciales que dictan resoluciones desfavorables al oficialismo.

Evidencia adicional demuestra que la propia Sala de lo Penal fue manipulada para asegurar un resultado político predeterminado. El magistrado Mario Díaz, la figura más visible del partido LIBRE en la Corte y coordinador de la Sala, presuntamente orquestó una maniobra mediante la cual, ante la ausencia del magistrado Mairena (quien se oponía a los enjuiciamientos), convocó a otra magistrada del mismo partido, Rubenia Galeano, para formar una mayoría dispuesta a obedecer las directrices de Rixi Moncada. Esta sustitución permitió a la sala declarar procedente el antejuicio y reabrir los casos—únicamente para bloquear la ejecución de la sentencia a favor de DRC, Inc.

Estos enjuiciamientos constituyen una represalia directa contra jueces que actuaron conforme a la ley, y envían un mensaje escalofriante a todos los miembros del poder judicial hondureño: que cumplir con el Estado de Derecho será castigado si entra en conflicto con la agenda política del partido LIBRE o sus aliados.

El abajo firmante presenta respetuosamente estos hechos como prueba directa de obstrucción estatal coordinada, persecución judicial y abuso de la discrecionalidad fiscal, en violación del derecho de los Estados Unidos y del derecho internacional.

XII. ANTECEDENTES PENALES DE RIXI MONCADA MÁS ALLÁ DE SU AFILIACIÓN SOCIALISTA

La conspiración criminal contra DRC, Inc. y su representante no surgió en un vacío. Rixi Ramona Moncada Godoy tiene un historial documentado de escándalos de corrupción pública y mala conducta, muchos de los cuales fueron investigados o denunciados en Honduras, aunque frecuentemente suprimidos por razones políticas. Estos episodios establecen un patrón de abuso de poder y son relevantes para la jurisdicción del FBI conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global

Magnitsky, y otras normas estadounidenses que protegen a ciudadanos de los Estados Unidos en el extranjero.

1. Escándalo del Hotel en 2009 – Dinero en efectivo y armas vinculadas a Rixi Moncada

En el año 2009, autoridades hondureñas descubrieron un escándalo que involucraba grandes sumas de dinero en efectivo sin justificar y armas no registradas, halladas en una habitación de hotel en Tegucigalpa supuestamente vinculada a personas relacionadas con Rixi Moncada. Aunque nunca se presentaron cargos penales debido a la interferencia política, el hecho fue ampliamente reportado por los medios hondureños y continúa siendo parte de su expediente público de sospecha.

2. Denuncia Parlamentaria de 2014 – Mala gestión en ENEE

En 2014, el diputado del partido LIBRE, Edgardo Castro, exigió públicamente una investigación sobre la gestión de la Sra. Moncada como Gerente General de ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), alegando irregularidades financieras graves, contrataciones por amiguismo y adjudicación de contratos cuestionables. Castro...

(Nota: Aquí faltaría el contenido que sigue después del “Castro,” para completar el punto 2.)

XIII. PRINCIPIO UNIVERSAL DE LOS PLAZOS PROCESALES

En términos simples, Rixi Moncada, Sonia Marlina Dubón, Manuel Antonio Díaz Galeas y Rebeca Santos desean un sistema legal sin plazos—donde el Estado pueda presentar o responder demandas cuando le convenga, sin consecuencia alguna. Pero los plazos son un principio universal de la justicia. Sin ellos, no hay firmeza, no hay equidad, y no hay Estado de Derecho.

Si permitiéramos que los demandantes—o los gobiernos—litigaran sin respetar los plazos, ninguna sentencia sería jamás definitiva, y ningún demandado estaría a salvo. En Honduras, esto abriría la puerta a una incertidumbre jurídica permanente, a retrasos utilizados como arma, y a la manipulación política de los tribunales.

A nivel global, tal caos destruiría por completo los sistemas judiciales. Los contratos perderían su valor. Las inversiones colapsarían. La corrupción prosperaría. Los plazos no son tecnicismos burocráticos: son la columna vertebral del orden legal.

XIV. FUNDAMENTO LEGAL DE LA JURISDICCIÓN DEL FBI

El FBI tiene jurisdicción clara conforme a las siguientes disposiciones del derecho penal federal de los Estados Unidos:

- 18 U.S.C. § 351 – Violencia o amenazas en el extranjero contra personas afiliadas al gobierno de los EE. UU.
- 18 U.S.C. § 1203 – Toma de rehenes mediante la amenaza de retención ilegal continua de bienes
- 18 U.S.C. §§ 2331–2332b – Actos de intimidación o coerción internacional contra ciudadanos estadounidenses
- 18 U.S.C. § 1349 – Conspiración para cometer fraude o privar a una persona de su propiedad bajo apariencia de legalidad
- Ley Global Magnitsky, que permite a los EE. UU. sancionar a funcionarios extranjeros corruptos

El abajo firmante solicita formalmente que el FBI:

- Revoque las visas de Rixi Moncada, Rebeca Santos y Manuel Díaz Galeas;
- Abra una investigación penal contra Rixi Moncada, Sonia Marlina Dubón, Rebeca Santos y Manuel Díaz Galeas conforme al derecho estadounidense aplicable;
- Remita el caso al Departamento de Estado para la imposición de sanciones bajo la Ley Global Magnitsky;
- Incluya a Rixi Moncada, Rebeca Santos y Manuel Díaz Galeas en la Lista Engel y emita sanciones en su contra;
- Coordine con la Embajada de los Estados Unidos en Honduras para garantizar la seguridad física del denunciante y su familia;
- Inicie procedimientos de extradición, en los casos en que sea legalmente apropiado.

Enlace de Dropbox a todos los documentos adjuntos:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/y2mzlw4oubgcgjvkrt05l/AB6pra6DiRoek2okjFP-al8?rlkey=wki1kypqvlafe2atn59cr94dd&st=5fbgofbl&dl=0>

Willie J. Huntley, Jr.
Abogado
The Huntley Firm, P.C.

Con copia a:

- SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
- CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
- DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
- EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TEGUCIGALPA, HONDURAS
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS
- INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES DE HONDURAS